



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-001-2019-00414-01
Demandante:	Martín Emilio Cuartas Muriel
Demandado:	AFP Colfondos S.A.
Litis Pasiva:	Compañía de Seguros Bolívar S.A., Junta Regional de
Calificación de	Invalidez, y Junta Nacional de Calificación de Invalidez
Asunto:	Apelación de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de Invalidez Común

**Medellín, junio cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante, respecto de la sentencia proferida el 26 de abril de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por Martín Emilio Cuartas Muriel contra la AFP Colfondos S.A., y en el que se integró el contradictorio con la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Junta Regional de

Calificación de Invalidez, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, como litisconsortes necesarios por pasiva, conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-001-2019-00414-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor Martín Emilio Cuartas Muriel instauró demanda ordinaria laboral con la AFP Colfondos S.A. pretendiendo el reconocimiento de la pensión de invalidez, el pago de las mesadas comunes y adicionales dejadas de percibir, los intereses de mora, y las costas del proceso.

En respaldo de tales pedimentos el señor Martín Emilio Cuartas Muriel expuso que fue calificado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con una pérdida de capacidad laboral del 50,83%, estructurada el 04 de octubre de 2016; que cuenta con más de cincuenta (50) semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores a la estructuración; y que el 17 de junio de 2019 le solicitó a la AFP Colfondos S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin que hubiera recibido ninguna respuesta (págs.03-14, doc.01, carp.01).

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, la **AFP Colfondos S.A.** afirmó que el señor Martín Emilio Cuartas Muriel fue calificado por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Junta Regional de Calificación de Antioquia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, estableciéndose una pérdida de capacidad laboral del 42,05%, estructurada el 19 de octubre de 2016, siendo este último dictamen el único le resultaba oponible; adicionalmente adujo que la presunta calificación rendida por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, nunca le fue puesta en su conocimiento

De consiguiente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones arguyendo que el demandante no acredita los requisitos mínimos para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, y de fondo excepcionó la inexistencia de la obligación, falta de causa en las pretensiones de la demanda, y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez; cobro de lo no debido; enriquecimiento sin causa; ausencia de configuración del derecho al pago de intereses moratorios; buena fe; la innominada o genérica; compensación y pago; y prescripción (págs.129-248, doc.01, carp.01).

De otro lado se advierte que por auto del 14 de mayo de 2021 se ordenó la integración del contradictorio con la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, como litisconsortes necesarios por pasiva (doc.09, carp.01).

La **Compañía de Seguros Bolívar S.A.** manifestó que no le constaban los hechos de la demanda; informó que el señor Martín Emilio Cuartas Muriel fue calificado en última instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 42,05%, estructurada el 19 de octubre de 2016, y con base en la cual, no es procedente disponer el reconocimiento pensional deprecado; y aseveró que la calificación expedida por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia no le resulta oponible, no fue puesta en su conocimiento al momento de la emisión, dictamen que no se comparte porque refiere patologías presuntamente diagnosticadas con posterioridad a la calificación inicial, y exagera, sin justificación, la calificación de las deficiencias.

En oposición a las pretensiones incoadas con el libelo genitor, excepcionó de fondo inexistencia de la obligación demandada; improcedencia de intereses de mora a cargo del asegurador; buena fe; y prescripción (doc.14, carp.01).

Por su parte, la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** igualmente expuso que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda, y afirmó que es la única entidad por creación legal llamada a dirimir las controversias suscitadas entre las administradoras de los fondos de pensiones y sus afiliados.

Consecuentemente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, y de mérito excepcionó el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez es plenamente válido; la determinación de la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho, específicamente al manual único de calificación de invalidez; inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez; buena fe por parte de la junta regional de calificación de invalidez y de ello se deriva la imposibilidad de condena en costas; inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar. ausencia de causa para pedir; y el estado clínico del paciente pudo variar después de que la junta regional emitió el dictamen de calificación y ello la exime de responsabilidad (doc.15, carp.01)

Finalmente, la **Junta Nacional de Calificación de invalidez** también dijo que no le constaba ninguno de los hechos de la demanda, y aseveró que el dictamen rendido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, carece de efectos jurídicos y fuerza vinculante, porque la referida entidad no hace parte de los organismos competentes para calificar la pérdida de capacidad laboral.

En su defensa excepcionó carencia de objeto por inexistencia de controversia respecto a la junta nacional de calificación de invalidez; legalidad del dictamen expedido por la junta nacional de calificación de invalidez: cumplimiento del debido proceso; la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la junta nacional exime de responsabilidad a la entidad; improcedencia de las pretensiones respecto a la junta nacional de

calificación de invalidez: competencia del juez laboral; buena fe de la parte demandada; y la excepción genérica (doc.16, carp.01).

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 26 de abril de 2023 declaró prosperas la excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa en las pretensiones de la demanda, y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez propuesta por la AFP Colfondos S.A.; la de inexistencia de la obligación demandada propuesta por la Compañía de Seguros Bolívar S.A.; la de calificación de la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración ajustada al manual único de calificación de invalidez propuesta por la Junta Regional de Calificación de Invalidez; y la de legalidad del dictamen propuesta por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; absolvió a la AFP Colfondos S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el señor Martín Emilio Cuartas Muriel, y condenó en costas al demandante, en favor de la AFP Colfondos S.A., la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (doc.35, carp.01).

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

El poderhabiente judicial del señor **Martín Emilio Cuartas Muriel** impetró el recurso de alzada en orden a que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda, sustentando que ante la incongruencia y contradicción que se evidenció entre los dictámenes rendidos por las entidades demandadas, su prohijado tuvo que acudir ante la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, entidad que con idoneidad, transparencia y claridad dictaminó una pérdida de capacidad laboral muy superior al 50%, con fecha de estructuración 04 de octubre de 2016, y cuyo perito calificador demostró credibilidad y seriedad respecto del análisis integral de la condición de salud del demandante; adicionalmente adujo que la referida

calificación no corresponde a un dictamen, sino a un documento que se presume auténtico, y no fue tachado de falsedad, ni contrariado científicamente, por lo que debe dársele pleno valor probatorio, como lo hizo la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 02 de julio de 2020, con ponencia del Dr. Orlando Gallo Isaza (minuto 00:25:45, video2, doc.35, carp.01).

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, el vocero de judicial del señor **Martín Emilio Cuartas Muriel** alegó que la calificación emitida por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia goza de presunción de autenticidad y legalidad, y no fue atacado por error grave en su contenido, siendo ello suficiente para soportar la decisión condenatoria deprecada, en ilación a lo sentenciado el 02 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del Dr. Orlando Gallo Isaza, en el proceso con radicado 05001-31-05-006-2017-00721-01, en el que se ventiló un caso igual o similar al de la referencia (doc.03, carp.02).

Por su parte, el poderhabiente judicial de la **AFP Colfondos S.A.** petitionó la confirmación de la sentencia absolutoria de primera instancia, arguyendo que el demandante no acredita la condición de inválido para acceder al reconocimiento de la prestación pensional deprecada, sin que la validez del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se hubiere desvirtuado con la prueba pericial incorporada al plenario, dictamen que por demás no fue demandado (doc.04, carp.02).

Finalmente, el apoderado judicial de la **Compañía de Seguros Bolívar S.A.** solicitó la confirmación de la sentencia de primer grado, alegando que el dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia no podía ser valorado como un simple documento, pese a que no fue tachado de falso, porque sin importar la forma en la que fue incorporado, su naturaleza es la de prueba pericial; y el perito calificador de la Facultad Nacional

de Salud Pública de la Universidad de Antioquia indicó con toda claridad cada una de las patologías calificadas en su dictamen, entre las que hizo referencia a una deficiencia por enfermedad cardiovascular hipertensiva, supuesta patología diagnosticada el 29 de mayo de 2018 para establecer una pérdida de capacidad laboral con fecha de estructuración del 04 de octubre de 2016, y admitiendo que eliminando esa patología el actor muy probablemente no alcanzaría una pérdida de capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%); adicionalmente, el perito tampoco pudo explicar satisfactoriamente su calificación al “rol laboral” que también calificó de manera injustificada por encima de lo calificado por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez (doc.05, carp.02).

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por el señor **Martín Emilio Cuartas Muriel**, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

### **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA**

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Martín Emilio Cuartas Muriel nació el 12 de diciembre de 1966 (págs.92-93, 170, 172-173, doc.01, carp.01), y el 02 de noviembre de 2016 le solicitó a la AFP Colfondos S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez (pág.162-169, doc.01, carp.01; págs.45-49, doc.16, carp.01).

- Que fue calificado por el Equipo Interdisciplinario de Calificación de la Compañía de Seguros Bolívar, mediante Dictamen 8461842-313 del 29 de noviembre de 2016, con una pérdida de capacidad laboral del 37,80%, estructurada el 19 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.26-30, doc.16, carp.01).
- Que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, a través del Dictamen 64683 del 27 de abril de 2017, con una pérdida de capacidad laboral del 42,05%, estructurada el 19 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.208-210, doc.01, carp.01; págs.286-290, doc.16, carp.01).
- Que fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante Dictamen 8461842-803 del 14 de febrero de 2018, con una pérdida de capacidad laboral del 42,05%, estructurada el 19 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.153-159, doc.01, carp.01; págs.11-13, doc.15, carp.01; págs.350-356, doc.16, carp.01).
- Que fue calificado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a través del Dictamen del 20 de mayo de 2019, con una pérdida de capacidad laboral del 50,83%, estructurada el 04 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.67-73, doc.01, carp.01).
- Que el 17 de junio de 2019 nuevamente le solicitó a la AFP Colfondos S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez, esta vez, con fundamento en el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (págs.74-79, doc.01, carp.01).
- Que cotizó 578,43 semanas (4.049 días) hasta el 01 de mayo de 2018 (págs.80-89, doc.01, carp.01), y acumuló un saldo de \$17.104.095 (pág.90-91, doc.01, carp.01).



### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si a el señor Martín Emilio Cuartas Muriel le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a cargo de AFP Colfondos S.A., efecto para el que tendrá que establecerse si en el cartulario se encuentra debidamente acreditado que el mismo perdió la capacidad para laborar por lo menos en el 50%?

### **2.4.- TESIS DE LA SALA**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual al demandante no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prestación pensional deprecada, siendo que en el plenario no obra medio demostrativo idóneo que acredite el acaecimiento del riesgo de la invalidez, en la medida en que el dictamen rendido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia no tiene la *virtud probandi* suficiente para desvirtuar las conclusiones vertidas en los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación, ni para tener por establecido que el demandante hubiere perdido la capacidad para laborar en los términos descritos en la normativa que reglamenta el derecho al reconocimiento de la prestación pensional. Consecuentemente la sentencia desestimatoria de primera instancia será **confirmada**.

### **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 establece:

*“ARTICULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.*

Por su parte, el artículo 39 ibídem, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, determina:

*“ARTICULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

- 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración*
- 2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma,”*

Así mismo, cumple memorar que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, señala cuales son las entidades competentes para establecer el estado de invalidez:

*“ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.*

*Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.*

En igual sentido, el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013 preceptúa:

*“ARTÍCULO 44. CONTROVERSIAS SOBRE LOS DICTÁMENES DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la junta como entidad privada del Régimen de Seguridad Social Integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes”.*

En relación con el valor probatorio de los dictámenes emitidos en el trámite administrativo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el dictamen emitido por las Juntas de Calificación de la Invalidez no puede ser considerado prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes:

*“El ataque esta edificado fundamentalmente en la aseveración según la cual el juzgador de segundo grado incurrió en un error de derecho consistente en dar por probado que no hubo accidente de trabajo, pese a que la prueba solemne acerca de la calificación de origen del accidente lo acredita fehacientemente, es decir el dictamen emanado de la junta de calificación. Planteamiento que resulta inexacto pues la referida prueba no es más que un experticio (sic) que la ley estableció debía ser practicado por unos determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne.*

*(...)*

*En consecuencia, al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, en el sub lite al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y sobre todo en casos tan especiales como lo es la protección de un derecho fundamental como ocurre en el asunto de marras” (CSJ SL del 29-06-2005, radicado 24392, SL del 18-03-2009, radicado 31062, SL del 06-03-2012, radicado 35097, SL-5622 de 2014, SL-42451 de 2016, SL-877 de 2020, SL-2756 de 2020).*

Sin embargo, debe relievase que la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica al indicar que *“los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena*

*competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías*” (CSJ SL del 19-10-2006, radicado 29622, SL-16374 de 2015, SL-5280 de 2018, SL-1044 de 2019, SL-2349 de 2021).

Así las cosas, la jurisprudencia ha colegido que, al ponderar las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, el juez: “... *debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...]. No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo*” (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, radicado 11001-31-03-034-2005-00301-01).

De ahí que la decisión del problema jurídico planteado necesariamente conduce a que el juez de la causa acoja el dictamen que mayor convencimiento le genera, acogiendo el principio de libre formación del convencimiento (artículo 61 del CPTSS), sin dejar de considerar que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (artículo 164 del CGP), que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 167 del CGP), y que la prueba pericial es necesaria para verificar hechos que interesan al proceso y requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos (artículo 226 del CGP).

## **2.6.- CASO CONCRETO**

De consiguiente, esta corporación recuerda que al señor Martín Emilio Cuartas Muriel le asistía la carga de probar que perdió el 50% o más de la capacidad para laborar, circunstancia que por requerir de especiales conocimientos médico-científicos, debía acreditarse mediante dictamen pericial, rendido por un profesional calificado en la materia, fundado en consideraciones de orden fáctico sobre la situación que es objeto de evaluación, en el que se relacionen los hechos que dieron lugar a la enfermedad, y que soporten los supuestos de hecho expuestos en el libelo genitor.

Para los anteriores efectos, la parte actora pretende que esta Sala acoja el dictamen rendido el 20 de mayo de 2019 por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y que establece una pérdida de capacidad laboral del 50,83%, estructurada el 04 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.67-73, doc.01, carp.01); y se desestime la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en el Dictamen 8461842-803 del 14 de febrero de 2018 (págs.153-159, doc.01, carp.01; págs.11-13, doc.15, carp.01; págs.350-356, doc.16, carp.01), quien confirmó la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, a través del Dictamen 64683 del 27 de abril de 2017, en el sentido de establecer una pérdida de capacidad laboral del 42,02%, estructurada el 19 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.208-210, doc.01, carp.01; págs.286-290, doc.16, carp.01), quien, a su vez, modificó la calificación emitida por el Equipo Interdisciplinario de Calificación de la Compañía de Seguros Bolívar, mediante Dictamen 8461842-313 del 29 de noviembre de 2016, que había establecido una pérdida de capacidad laboral del 37,80%, estructurada el 19 de octubre de 2016, por enfermedad de origen común (págs.26-30, doc.16, carp.01).

Pese a ello, las citadas entidades advierten que el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (págs.67-73, doc.01, carp.01) no acredita el lleno de los requisitos descritos en el inciso 6º del

artículo 226 del CGP, específicamente en lo referido a la incorporación de los documentos idóneos que habilitan al perito para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional (numeral 3º), la lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años (numeral 4º), de la lista de casos en los que hubiere sido designado como perito, o en los que hubiere participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años (numeral 5º), y la declaración o manifestación expresa de si había sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte (numeral 6º), de si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente (numeral 7º), de si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materia (numeral 8º), de si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio (numeral 9º), y especialmente, en lo que concierne a la anexión de los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen (numeral 10º).

Así las cosas, se infiere que el medio demostrativo en el que se soporta la *causa petendi*, carece de los requisitos necesarios para ser valorado como un dictamen pericial al interior de un proceso judicial, sin que sean de recibo las consideraciones expuestas por el poderhabiente judicial del señor Martín Emilio Cuartas Muriel, en la sustentación del recurso de apelación al sostener que a la calificación emitida por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia debía dársele el tratamiento de una prueba documental, presumiéndola auténtica, por no haber sido tachada de falsedad, en la medida en que, como ya se explicó, la pérdida de capacidad laboral debe acreditarse mediante prueba pericial, porque requiere especiales conocimientos médico científicos (artículo 226 CGP).

Lo anterior sería suficiente para desestimar las pretensiones incoadas, y confirmar la sentencia desestimatoria de primera instancia, pero si en gracia de discusión se admitiere que la calificación a la que se viene haciendo referencia surte plenos efectos probatorios, cumple relieves que confrontada con la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es la única susceptible de ser confutada ante la jurisdicción ordinaria, por ser la que se encuentra en firme (artículo 11 del Decreto 1352 de 2013), se evidencia que en la misma, además de calificar las deficiencias por *disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático y las deficiencias de la columna lumbar*, se calificaron las deficiencias por *enfermedad cardiovascular hipertensiva*, para cuya valoración deben considerarse la historia clínica, los hallazgos físicos y los resultados de pruebas objetivas, siendo el historial clínico el factor modulador para la calificación (numeral 2.4., del Capítulo II, del Decreto 1507 de 2014).

Ahora bien, para sustentar dicha calificación el perito calificador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia solo tuvo en cuenta el presunto registro consulta de un control de riesgo cardiovascular por hipertensión arterial del 29 de mayo de 2018, en la que se refirió “... *tratamiento con hidroclorotiazida, enalapril, y verapamilo*” (ver página 69, doc.01), siendo del caso precisar, en primer lugar, que en el expediente no obra soporte que acredite que la referida consulta tuvo lugar, ni del tratamiento médico al que presuntamente se encuentra sujeto el demandante, pues como se advirtió en los párrafos que anteceden, al plenario no se incorporaron los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen; en segundo lugar, que el historial clínico anexado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (págs.63 y ss, doc.16, carp.01), solo refiere los datos médicos recopilados hasta el 09 de febrero de 2018, en la medida en que la calificación que rindió se emitió el día 14 del mismo mes y año, y que en aquel no se documentó ni dejó evidencia de la existencia de enfermedad cardiovascular hipertensiva; y en tercer lugar; que la fecha en la que presuntamente se documentó la enfermedad cardiovascular, 29 de mayo de 2018, resulta muy posterior a la fecha en que se fijó la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, 02 de noviembre de 2016, la cual solo puede

determinarse con base en la evolución de las secuelas de la enfermedad (artículo 3° del Decreto 1507 de 2014), evolución, que como se ha venido indicando, no está debidamente acreditada, teniendo en cuenta que el factor modulador para la calificación de las deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular es el historial clínico que *“Contiene los datos clínicos específicos para la valoración; recolecta el curso clínico individual desde el diagnóstico, pasando por la evolución y los tratamientos relevantes, como indicadores de la cronicidad y severidad de cada una de las clases de daño.”* (numeral 2.4., del Capítulo II, del Decreto 1507 de 2014),

En glosa de lo anterior, esta Sala concluye que el dictamen rendido el 20 de mayo de 2019 por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, no tiene la fuerza probatoria suficiente, por ausencia de refrendación fáctica y científica suficiente, para acreditar que el señor Martín Emilio Cuartas Muriel perdió el 50% o más de la capacidad laboral y/u ocupacional; deficiencia probatoria que no se satisface con la sustentación rendida por el perito calificador, siendo que, el mismo admitió que la calificación de las deficiencias del sistema cardiovascular únicamente se derivó del registro del control por hipertensión, y que sin la valoración de dicha deficiencia, la calificación del actor no igualaría ni superaría el porcentaje de invalidez (desde el minuto 00:06:40, video1, doc.35, carp.01).

Sin necesidad de otras elucubraciones, se confirmará la sentencia desestimatoria de primer grado. Costas en esta instancia a cargo de Martín Emilio Cuartas Muriel, por habérsele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto. Se fijan como agencias en derecho en favor de AFP Colfondos S.A., la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley





**FALLA:**


- 1.- Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 26 de abril de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Martín Emilio Cuartas Muriel contra la AFP Colfondos S.A. y en el que se integró el contradictorio con la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, como litisconsortes necesarios por pasiva.
- 2.- Costas en esta instancia a cargo de Martín Emilio Cuartas Muriel y en favor de la AFP Colfondos S.A; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.
- 3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**